

Violencia, peligros autoritarios y desafíos democráticos¹

Augusto Barrera Guarderas²

Entre septiembre de 2003 y mediados de marzo -en que se escribe este texto-, han ocurrido una serie de amenazas y hechos de violencia inusuales en el país. Hasta hoy la mayoría de ellos permanecen envueltos en el misterio y la oscuridad. Empero, tanto el contexto político como la sucesión y características de algunos de estos episodios, han abierto motivos para que la sociedad ecuatoriana se pregunte si esta situación es atribuible a los mismos autores intelectuales y, si es así, ¿cuáles son sus propósitos?

En la versión del Gobierno no existe ninguna relación entre estos sucesos. Se ha mencionado que el asesinato de Patricio Campaña y el atentado a Carlos Muñoz tendrían móviles específicos no atribuibles a ninguna intención política. Ha descartado además su responsabilidad en las intimidaciones a varios periodistas. En cambio, el ataque a Leonidas Iza y sus familiares, el robo a la sede de Pachakutik y el intento de robo al local de la Izquierda Democrática, así como las agresiones

Barrera, Augusto, 2004, "Violencia, peligros autoritarios y desafíos democráticos", en ICONOS No.19, Flaco-Ecuador, Quito, pp. 8-12.

- 1 Texto elaborado para la Revista Iconos. El contenido recoge parcialmente la intervención en el panel "Estrategias democráticas y peligros autoritarios", organizado por el Grupo Articulación Democrática en marzo de 2004.
- 2 Politólogo, profesor universitario y miembro del Foro Urbano y del Grupo Articulación Democrática.

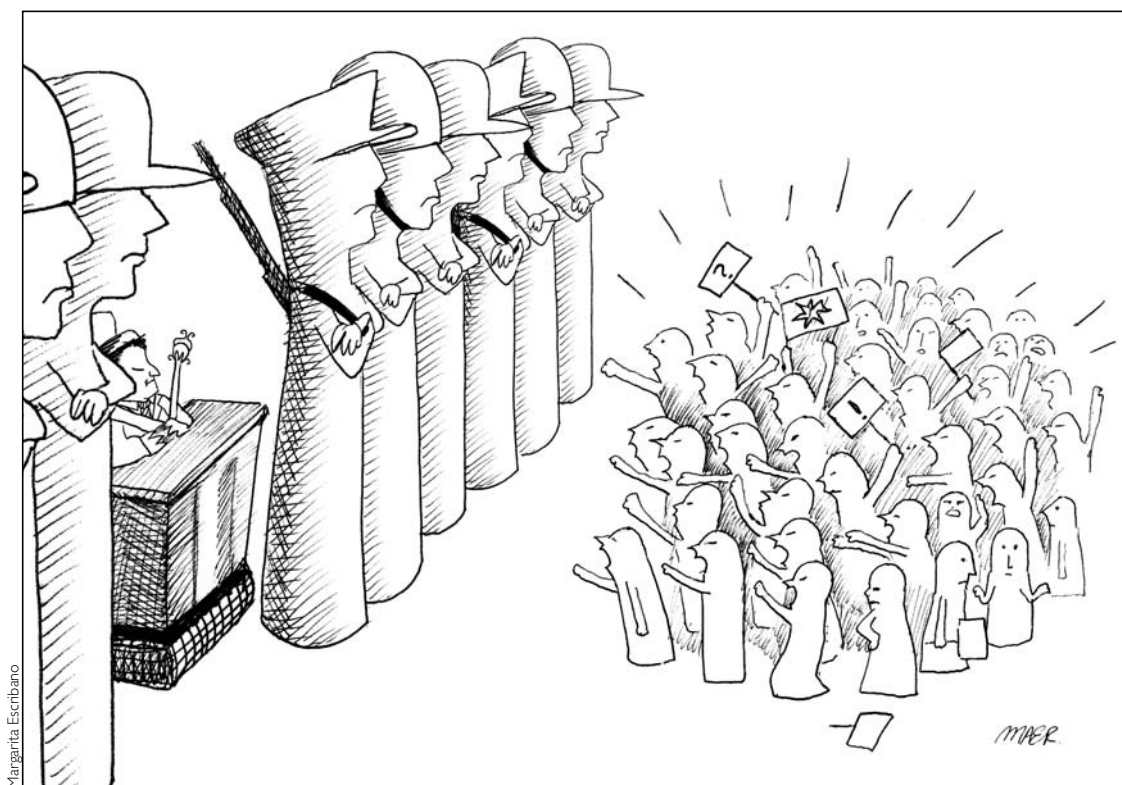
a miembros y oficinas del TSE, son hechos que están hasta hoy en el misterio, sin pistas claras ni explicaciones convincentes.

En este tipo de violencia se pone en juego la dimensión político simbólica, tanto en el contexto en el que ocurren los hechos, como en los efectos que ellos acarrearán. Bajo esta óptica, este artículo explora algunas aristas implicadas en estos episodios. No se trata de hacer una especulación policial ni mucho menos acusar temerariamente, sí en cambio, evidenciar algunas tendencias preocupantes de deterioro de la precaria democracia ecuatoriana.

Un ambiente enrarecido

Asumiendo en principio la veracidad de la versión oficial, no dejó de provocar sospechas el que las personas e instituciones agraviadas mantengan confrontaciones con el gobierno. El presidente Gutiérrez ha mantenido agrios intercambios verbales con algunos movimientos sociales, con un sector de la CONAIE y Pachakutik y con la ID. Es además público que hay temas pendientes con el TSE cuyo tratamiento, en especial el financiamiento ilegal de la campaña presidencial, puede conducir a graves implicaciones. En ambos casos hay, más que escaramuzas, un tinglado de enfrentamiento político establecido y profundo.

El gobierno del PSP ha desplegado una "política" muy cuidadosa -mucho más que en casi todos los ámbitos de acción- de debilitamiento del movimiento indígena a través del



uso de tres tipos de recursos: a) la negociación local y provincial de pequeñas parcelas de presupuesto y poder con dirigentes y pseudo dirigentes indígenas en un contexto organizativo matizado por intereses y conflictos³, b) la persistencia de las visitas y ofrecimientos a las comunidades de la sierra, con o sin picos y palas, con el manifiesto propósito de socavar la base de las organizaciones sociales opositoras y, a la vez, levantar sus propios cuadros organizativos y eventualmente electorales, c) el atemorizamiento selectivo evidenciado en hechos como la detención del presidente de Ecuarrunari, la tristemente célebre lista de “enemigos del gobierno”, o las intimidatorias declaraciones de miembros de PSP en los días cercanos al 21 de enero. A lo interno, esta estrategia se completa con el reavivamiento de un discurso indigenista y excluyente que aísla al movimiento.

En el frente con la ID, el gobierno ha exhibido una particular virulencia alrededor de la acusación y el levantamiento de la inmunidad al diputado Haro. Más allá de la veraci-

dad y estilo de las denuncias y las réplicas, hay por lo menos tres intenciones socialpatrióticas en esa confrontación: a) la disputa la base electoral y social serrana con la ID, intención que, dicho sea de paso, es vista con simpatía por el PSC; b) la organización de un bloque político institucional inusual alrededor de las denuncias de tráfico de armas; las FFAA, el PSC y el gobierno podrían encarar al unísono al mismo adversario y el Presidente, al fin, lideraba una “iniciativa política” con sus fuerzas de apoyo; c) fue ocasión propicia para intentar convalecer las relaciones con las FFAA que lucían deterioradas.

Hipótesis y actores racionales

En este terreno de confrontación, los episodios de violencia han adquirido un particular relieve y, de hecho, han provocado que los agraviados responsabilicen al Gobierno por lo sucedido. Ahora bien, se puede inculpar al gobierno de varias formas. Al menos dos.

La una se refiere genéricamente a la exigencia del cumplimiento del deber constitu-

³ De hecho, la cercanía política de la dirigencia de algunas organizaciones de la CONAIE a este gobierno ha provocado tensiones al interior de Pachakutik.

cional y legal de las autoridades por precautelar la seguridad y mantener un razonable clima de convivencia. En cierto modo, todo gobierno es responsable de precautelar la paz pública y rendir cuentas sobre su alteración. La imputación de esta responsabilidad, incluida la exigencia por la aclaración exhaustiva de los responsables y móviles de los episodios de violencia parece ser obvia, necesaria, razonable y legítima.

Más polémico resulta el otro significado de la inculpación. Supondría un grado de participación de algún sector gubernamental en la autoría o encubrimiento de estos hechos. Algunos ojos volvieron su mirada a los círculos de partido presidencial. La combinación de un carácter cuasi policial con la iracundia política compone una mezcla peligrosa. Sin embargo, si se trata de mirar los efectos de los episodios de violencia, en lugar de afectar al adversario o debilitar su capacidad de acción, en lo inmediato el resultado es exactamente el inverso. La opinión pública procesó los hechos como una causa de simpatía con las víctimas y de sospecha al gobierno. Es más, el ataque al presidente de la CONAIE parecía provocar la reactivación de la agitación social parecida a la vivida entre diciembre y enero. En lógica estricta, el efecto de corto plazo fue atizar el fuego y profundizar la inestabilidad. A partir del presupuesto de que se trata de actores racionales, no parece plausible la hipótesis de que la lógica que guíe estas acciones sea la de un gobierno golpeando a la oposición.

Un horizonte de más largo plazo, en cambio, puede abrir otras interpretaciones. La reacción de la CONAIE de precipitar la movilización del 16 de febrero avalaría la hipótesis de que se trataba de actualizar un clima de enfrentamiento. A juzgar por la poca contundencia de esas movilizaciones (con la excepción de paro de Cotopaxi), el pretendido propósito podría ser desgastar a la organización, provocándola.

Otra hipotética causa, que sólo pudiera entenderse en un ciclo más largo, está relacionada con la intención de “violentizar” la

vida política del país. Hasta hoy y más allá de los grados de beligerancia social, la matriz del conflicto gobierno-oposición popular se ha mantenido bajo un marco mínimo de un estado de derecho; esto es, la fuerza pública ha mantenido el monopolio de la coerción y correspondientemente la responsabilidad política y ética de las acciones represivas y, al mismo tiempo, los grupos sociales no han desarrollado formas de violencia insurgente. Incluso en algunos casos se han acordado los marcos de la protesta. El tipo de violencia implícito en estos hechos -selectiva, anónima y ruin- disuelve todo esquema de responsabilidades y de allí su potencial devastador; coloca al país al inicio de una espiral marcada por la proliferación de actores y acciones violentas con el consiguiente efecto esterilizador del miedo.

Paradojas: debilitamiento del Estado y peligros autoritarios

Una arista sumamente preocupante que se desprende del razonamiento anterior es la legitimación de un progresivo proceso de “militarización” o “policialización” política e institucional. Este gobierno ha colocado a las FFAA en el centro del debate político. Es de suponer que la procedencia militar del Presidente, así como de varios altos funcionarios, provoque una asociación entre las FFAA y este gobierno en particular. Sin embargo, y en rigor, los vínculos no deberían ser diferentes que en otros casos. El partido de gobierno es Sociedad Patriótica y no las FFAA.

Cabe por tanto seguir con acuciosidad las estrategias que han puesto a la institución armada en el andarivel político: como se señaló anteriormente, el errático manejo del caso de las armas y los cabildeos con partidos políticos para enjuiciar a un diputado, los nombramientos de cerca de un centenar de militares en responsabilidades administrativas en áreas altamente sensibles como la energía y las aduanas, que contagia de una corresponsabilidad política a la institución castrense.

A ello hay que sumar otros signos evidentes en la cúpula de Carondelet. La aversión que pueden producir afirmaciones como “este es un gobierno de coroneles” o “nos vamos a quedar veinte años”, pronto se convierte en temor fundado cuando quien lo ha dicho, en este caso un ciudadano sin ningún cargo público, está en capacidad de inmiscuir recursos y jefes policiales en sus actividades particulares, o más, de tener a su diestra al mismísimo Presidente como auspiciante de sus acciones proelitistas. La capacidad de distinguir entre lo público y lo privado (llámense parientes, colegas, amigos o influencias) es un aspecto fundante –para no usar el término elemental- de la ética de la gestión pública que está siendo olvidado.

Finalmente, aunque el Presidente de la República ha restado importancia al documento al que él mismo se ha referido como la “propuesta de reforma política”, la proposición de temas como la reelección presidencial inmediata o la facultad de disolver el Congreso en el mismo paquete que el voto de los militares en servicio activo, establece una dirección hacia un régimen hiperpresidencialista con tintes autoritarios.

Hay, en suma, actores, intenciones y racionalidades que pueden nuclearse en torno a un camino de mayor estrechamiento de la democracia. La debilidad política del Gobierno es, paradójicamente, un factor de riesgo dada su necesidad de arrimarse a poderes fácticos y entregarles aún más capacidad de decisión. Sería el peor encadenamiento de los hechos de violencia con peligros autoritarios.

Desafíos democráticos

El optimismo con el cual los politólogos institucionalistas predecían un camino lineal hacia la consolidación de las democracias en América Latina, se ha disuelto sistemáticamente hasta ser reemplazado por una gran incertidumbre sobre el futuro de los regímenes políticos.

En contra del fundamento de la legitimidad democrática por la cual “el otorgamiento

de la autoridad para ejercer el poder del Estado debe emerger de las decisiones colectivas de los miembros de una sociedad”⁴, la realidad nos muestra que los estados se debilitan hasta relativizar la noción de soberanía, que las asimetrías sociales se profundizan al punto de romper un umbral mínimo de pertenencia e inclusión, que los poderes fácticos sustituyen a golpes de mano la soberanía popular por los intereses de grupos de presión.

El vaciamiento de la capacidad deliberativa y electiva de la democracia es una condición de la dominación y de la desconstitución de posibilidades emancipadoras de las sociedades. La democracia vaciada refuerza la lógica perversa de la negociación fragmentada con grupos de interés, el reinado de un corporativismo excluyente y el imperio de clientelas políticas en el patrón más tradicional. La supuesta modernización neoliberal ha encubierto una tremenda involución en la construcción de las instituciones y en las prácticas políticas.

La expresión institucional -efecto, condición y causa circular- del envilecimiento de la democracia es un Estado débil, corrupto e incapaz. Este descalabro del régimen ha adoptado varias formas en América Latina. Los ribetes dictatoriales de Fujimori, el bloqueo venezolano, las revueltas sociales en Bolivia y Ecuador seguidas de recambios en los presi-

Hay actores, intenciones y racionalidades que pueden nuclearse en torno a un camino de mayor estrechamiento de la democracia. La debilidad política del Gobierno es, paradójicamente, un factor de riesgo dada su necesidad de arrimarse a poderes fácticos y entregarles aún más capacidad de decisión.



4 Cohen, Joshua, 2000, “Procedimiento y sustancia en la democracia deliberativa”, en *Revista Metapolítica* Vol. 4, No. 14, abril/junio, México, p. 24.



Margarita Escribano

dentes, el descalabro del gobierno radical en Argentina. En varios de estos casos, las FFAA aparecen como un actor no sólo dirimente - de algún modo siempre tuvieron un rol tutelar-, sino incluso como un factor estructurador de las fuerzas y escenarios políticos y sociales.

Aunque este nuevo rol institucional tiene características diferentes al desempeñado en la década de los setenta, ocurre nuevamente en medio del agotamiento de los modelos políticos y económicos dominantes, de la redefinición de los alcances de los estados nacionales, de grados diversos de deslegitimación de los partidos políticos y de la emergencia de fuertes actores sociales contrahegemónicos que, si bien pueden confrontar el orden caduco, no tienen aún la fuerza y amplitud para edificar un nuevo régimen. Es precisamente en este terreno en que las FFAA pueden estar tentadas a sustituir los roles de la sociedad y del conjunto del Estado. No parece razonable

abonar en ese camino. Al contrario, cabría impulsar la demanda por la preservación institucional de las FFAA y la toma de distancia del conflicto propiamente político. Si eso no es claro para el partido de gobierno, lo debería ser para la institución.

Pero más allá de eso, lo de fondo sigue siendo la necesidad de construir condiciones sociales y políticas para impulsar, como mínimo, un proyecto nacional y democrático. Ese desafío democrático en este momento “no puede apoyarse en los hábitos establecidos y normas reconocidas por todos. No se trata de restaurar normas regulatorias sino de crear aquellas constitutivas de la actividad política: la transición exige la elaboración de una nueva gramática”⁵. Una nueva gramática sólo será viable en tanto destruye los mecanismos de exclusión económica, social y cultural.

En esa perspectiva parecen visibles algunos ejes de acción política inmediata: a) la consolidación, afianzamiento y extensión de una cultura política democrática y la oposición radical e intransigente contra todo asomo de autoritarismo; b) la articulación de un conjunto de elementos de agenda básica que refleje, al menos, mínimos acuerdos; c) el establecimiento de mecanismos concretos de coordinación del campo democrático y progresista, a partir de los cuales puedan impulsarse posiciones de vigilancia, exigencia, propuesta o veto.

Marzo 2004

5 Lechner, Norbert, 1988, *Los patios interiores de la democracia*, Fondo de Cultura Económica, México, p. 32.